

“En México hay una guerra derramada hacia toda la sociedad”

FEDERICO LARSEN :: 28/10/2014

Entrevista con Ana Ester Ceceña, economista y analista política. La creciente crisis política desatada por la desaparición de 43 estudiantes en el municipio de Iguala

Guerreros Unidos, Los Rojos, La Familia, Los Caballeros Templarios, son solamente algunos de los nombres de las organizaciones criminales del Estado de Guerrero, México, que han comenzado a aparecer con fuerza en las páginas de la prensa internacional en las últimas semanas. Todos nombres que remiten a la fuerza, la virilidad, la lealtad, y que han servido para firmar las peores atrocidades cometidas en ese paraíso turístico en las últimas décadas. Según datos oficiales, solamente en 2013 se cometieron allí 2.203 homicidios. Una tasa de 63 asesinatos cada 100.000 habitantes, la más alta del país. Pero aun esos datos tienen el defecto de estar basados sobre lo que las autoridades federales y distritales registran, y en los últimos tiempos quedó más que claro que esa información es muy poco confiable. Porque si hay algo que caracteriza a los Guerreros Unidos, Los Rojos, La Familia o Los Caballeros Templarios, es su profunda penetración en la vida política e institucional de Guerrero.

Alcaldes, fiscales, gobernadores y legisladores han sido acusados y hasta condenados como jefes de esos mismos grupos. El último caso que conmocionó a la sociedad mexicana, y que puso en evidencia estos vínculos, fue la desaparición de 43 estudiantes en el municipio de Iguala a manos de la policía local el pasado 26 de septiembre. Todos eran alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, estado de Guerrero, institución que ha formado históricamente jóvenes con una fuerte tradición de lucha social. Entre sus ex alumnos se destacan Lucio Cabañas Barrientos, líder del grupo guerrillero Partido de los Pobres; el sindicalista Genaro Vázquez Rojas, asesinado en una emboscada por el ejército, o el dirigente comunista Othón Salazar Ramírez. En diciembre de 2011 la represión policial contra los estudiantes de esa escuela dejó un saldo de dos jóvenes muertos durante una protesta para exigir mejoras edilicias para la institución.

Los normalistas de Ayotzinapa y sus profesores fueron atacados el mes pasado por efectivos municipales mientras viajaban a la manifestación que todos los años se realiza en la Ciudad de México en conmemoración de la masacre de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968. Allí pretendían llevar sus demandas por una reforma educativa y cuestionaban a las autoridades locales por las condiciones en que deben estudiar. Sin embargo, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien actualmente está prófugo, ordenó que se detuvieran los colectivos en que se trasladaban los normalistas. Desde ese momento seis personas murieron, 25 resultaron heridas y 43 estudiantes desaparecieron. Por estos hechos, las autoridades de Guerrero, pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática (PRD), fueron sindicadas como cómplices del crimen organizado que azota el Estado, y la sociedad toda salió a manifestarse para pedir la aparición con vida de los jóvenes y la renuncia de los mandatarios locales. “Estos muchachos de Ayotzinapa lo que marcaron fue realmente el traspaso de un umbral”, analizó en esta entrevista con Miradas

al Sur Ana Esther Ceceña, economista del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y referente del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.

-¿Cómo se puede analizar lo que sucede en la política mexicana, a la luz de lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa?

-Están pasando muchas cosas con la política mexicana. Es un proceso que viene avanzando desde hace unos 12 o 15 años, y se ha relacionado también con esta política general de la droga que hizo correr los centros neurálgicos desde Sudamérica hacia México. Porque, como el mercado más grande de consumo es EE.UU., México es la locación más adecuada. Eso fue provocando un corrimiento de esas actividades ilícitas relacionadas con la venta, el tráfico e incluso con la producción misma de drogas. Cuando esto se instaló ya de manera consistente en el país, EE.UU. promovió una política que llamaba de guerra contra las drogas, que fue asumida cabalmente por el entonces presidente Felipe Calderón a partir del año 2006. Esta “guerra contra el narco”, como se la llamó, significaba por un lado dar institucionalidad al trabajo del ejército en seguridad interna, y eso movió muchas cosas en el terreno de los cuerpos de seguridad del país, porque ya no eran solamente las policías las que estaban combatiendo el crimen organizado sino que entraba el ejército de manera muy protagónica en el combate supuestamente al narcotráfico.

Desató realmente una guerra en el país esta política. A pesar de que la sociedad mexicana ha estado insistiendo muchísimo en que no es ni siquiera la manera de detener al narco, y que está provocando problemas terribles en el país, no se ha querido modificar. No solamente por las autoridades mexicanas. EE.UU. ha dicho reiteradamente que esa es la política adecuada y la que van a sostener. Y la sostienen a través de la Iniciativa Mérida y también a través de otro conjunto de relaciones que tienen con México hace tiempo atrás y que se han ido reforzando, pero siempre con esta misma intención. Eso se combina, por otro lado, con un país en el que las instituciones políticas son muy frágiles porque están muy deslegitimadas y porque la corrupción es algo realmente sistemático y abarca todos los niveles del manejo público.

-Qué significa esto para la vida cotidiana de la población?

-Hoy en México al mismo tiempo que hay reclamos por la aparición de estos muchachos tenemos muchos otros desaparecidos. Estos jóvenes de Ayotzinapa lo que marcaron fue realmente el traspaso de un umbral, por la manera tan impune, tan salvaje como fueron tratados. Pero de hecho es una tónica que está más o menos instalada en todo el país, y cada día aumenta el número de víctimas y desaparecidos. Hay muchos reclamos en ese sentido pero al mismo tiempo hay reclamos en todos los otros niveles. Es decir que hay una situación en la que ha desaparecido, o por lo menos hay vacíos gigantescos en el estado de derecho. En parte por esta militarización ascendente. Entonces no hay estado de derecho, no hay autoridades a las cuales acudir, no hay instancias que garanticen una cierta seguridad ciudadana, y eso combinado con el aumento de los negocios del crimen organizado y de varios otros tipos ha dado lugar a un explosivo. Estamos preocupadísimos porque el país parece estar a punto de estallar en pedacitos. Es decir, a punto de ser balcanizado.

Porque no hay autoridad del Estado. Incluso ahora con estos acontecimientos terribles, mientras la sociedad está escandalizada, el presidente trata el tema como si fuera un atropellamiento de una persona en un viaducto. El Estado central está muy frágil y los poderes locales han crecido muchísimo. Se han fortalecido en parte a través de la representación política que tienen los gobernadores, pero siempre muy vinculados con la actividad mafiosa que hay en cada región. Entonces usted va a tener en cada lugar elecciones en las cuales algunos candidatos son retirados por miedo y otros son puestos con recursos del crimen organizado. De manera que se ha ido conformando una estructura de poder en todo el país de poderes locales muy contaminados por el crimen organizado y un Estado muy débil, con sospecha de estar imbricado también con el narco. Todo esto en el medio de una total y absoluta impunidad. La sociedad ha sido colocada en una situación de indefensión casi total. Se siente muy sola, muy agredida y en cierto sentido descontrolada porque no se sabe bien por dónde vienen los golpes, porque llegan por todos lados. No es una guerra muy focalizada. Es una guerra derramada hacia toda la sociedad. Y de repente puede ocurrir que es contra algunos empresarios, luego contra un poblado, o contra estudiantes o cualquier otro miembro. Es una situación de una tremenda inestabilidad, de un tremendo vacío del estado de derecho, de una indefensión muy grande y de una impunidad total.

-En su momento llamó la atención que las autoridades involucradas fueran miembros del PRD, que se presentó en los últimos años como un contrapeso progresista a la corrupción generalizada...

-Es el sistema político en su conjunto. Por supuesto hay matices, pero que en estas circunstancias son menores. Ya no hacen diferencias. El caso de Guerrero es gravísimo en ese sentido, es muy elocuente. Porque el gobernador que ha sido reiteradamente señalado por una actitud de arrogancia e impunidad y atropello, está sostenido por el PRD. La cúpula le ha sostenido su apoyo y está entonces involucrada en lo que está sucediendo ahí. El gobernador dijo que él no intervino cuando supo lo que estaba sucediendo con estos muchachos porque llamó al alcalde de Iguala y no le contestó el teléfono, por ejemplo.

-¿Entonces no hay ninguna alternativa?

-La situación es difícil porque realmente ha escalado muchísimo. Los niveles a los que ha llegado esta imbricación entre la política, las instituciones y el crimen organizado son muy altos. Pero la sociedad está movilizadísima incluso en estas circunstancias que son tan difíciles, de tanto miedo. Tenemos jóvenes en las calles de todas las ciudades importantes del país todo el tiempo reclamando. Y eso es algo muy sentido por los jóvenes. Porque la verdad que esto es una guerra.

Una guerra social en que la gran parte de los afectados son los jóvenes.

Se mata a los migrantes jóvenes, se desaparecen jóvenes que son llevados a fincas y se les hace trabajar como esclavos. Están ocurriendo cosas gravísimas que no salen tanto a la luz y que involucran sobre todo a la población joven, que ya están golpeados por el neoliberalismo, por una situación económica difícil, que no tienen muchas perspectivas de futuro y además son las principales víctimas de estos criminales.

Creo que ha llegado el momento de que, si de por si van a vivir asustados porque les puede

pasar de todo, es el momento de tomar la rienda y salir a levantar sus voces. Y se están organizando, se están movilizanado. Algo muy curioso es que en este caso tenemos jóvenes de universidades privadas, de las que forman los cuadros de la burguesía, que se han movilizanado y han hecho actos en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa. Es decir que hay realmente una conmoción social amplia, que abarca muchos sectores de la sociedad. Pero además tenemos organizaciones de derechos humanos, más tradicionales, intelectuales, académicos, sindicatos o trabajadores que también se movilizan. Incluso organizaciones barriales.

Los culpables de este asesinato son los culpables de todo lo que le está ocurriendo a esta sociedad. Es como un criminal amplio, un masacrador muy amplio que nos está golpeando a todos en todos lados. Que está carcomiendo derechos, que nos está quitando las pocas libertades democráticas que se habían conseguido. Y llegó el momento en que la sociedad no está más dispuesta a permitirlo.

No se si esto es suficiente como para echar atrás una dinámica que ha ido corroyendo, descomponiendo la sociedad hasta tal punto, pero creo que más bien tendríamos que pensar en qué tanto se logra reconstruir los valores sociales, los valores democráticos, en un mediano plazo, y qué tanto se logra controlar a la corrupción cuando ésta ha llegado a los niveles más altos. Esto quiere decir que las instituciones que estarían abocadas a controlar y sancionar están comprometidas con la misma corrupción. Es una situación que no se resuelve de un día para el otro.

No basta con cambiar un presidente o poderes locales. Es un trabajo que va a tomar tiempo, que nos va a costar para recuperar la posibilidad de vida en este territorio. Pero mucha gente está en eso y estamos peleando como podemos y donde podemos.

-Es llamativo cómo en los países con mayor presencia militar y económica de EE.UU., como México, Colombia o inclusive Paraguay, se note mayormente esta descomposición y la actuación del crimen organizado. ¿Hay ahí alguna relación?

-Lo que está ocurriendo en México tiene que ver con este reacomodo territorial y disciplinario que corresponde al siglo XXI. Nosotros hablamos aquí de que estas guerras como la que está ocurriendo en México son las guerras del siglo XXI. Que no son propiamente una guerra. No es una dictadura. Eso tiene principio y fin. En el caso de lo que nos está ocurriendo a nosotros es el crecimiento rampante de una situación de guerra. Una situación de guerra que se instala y que como no tiene un principio claro tampoco tiene un fin claro. Va poco a poco transformando las formas de vida. Por un lado con ese disciplinamiento que requiere el capitalismo a nivel internacional. Para nosotros EE.UU. es el hegemón principal de este sistema capitalista por más que haya disputas hegemónicas. Y para nosotros, que vivimos al lado, que tenemos una frontera enorme con ellos, que tenemos 17 millones de mexicanos viviendo allá, que tenemos vínculos muy fuertes con ellos, la política de EE.UU.

es la que se asume como representación del capitalismo mundial. Para ellos el siglo XXI ha sido un siglo de muchos desafíos porque el capitalismo como tal está siendo fuertemente cuestionado en todos los lugares del planeta. Y poblaciones incluso chiquitas se levantan contra las políticas capitalistas. Y eso está ocurriendo en tantos lugares que se ha vuelto un

elemento de desafío a los planes de impulso de la acumulación capitalista. Las empresas son fuertemente contestadas, se buscan recursos legales o de movilización para evitar que las mineras destruyan territorios. Entonces el desafío ha implicado que en este siglo XXI se ha estado pensando estratégicamente un reordenamiento de las disciplinas en el territorio. Por disciplinas entiendo la aceptación de un modo o de otro de la dinámica del sistema capitalista y su modo de acumulación.

Para hacer este reordenamiento evidentemente uno de los brazos fuertes ha sido el militar. La militarización en América latina solamente en el siglo XXI ha hecho pasar el número de bases en un continente donde hay una situación relativa de paz, donde EE.UU. tiene muchos recursos diplomáticos y económicos para tener el control de la situación. Que se ha dado a través de las bases militares pero también en las modificaciones en el comportamiento militar. En las reglas de control de las sociedades. Por ejemplo, los cambios en los códigos penales y las leyes relacionadas con la seguridad. La introducción por ejemplo de esta idea del enemigo terrorista en todos nuestros países. Y lo que hace eso es colocar a la población como sospechosa. El terrorista es un enemigo difuso, que no se sabe dónde está y por dónde va a salir.

Que generalmente se parece mucho a la gente sencilla, que actúa desde su casa haciendo por ejemplo un arma biológica. Entonces todo poblador de estos países es un sospechoso. Cambió el estatus. Nosotros antes eramos siempre inocentes hasta que se pruebe que somos culpables. Hoy es al revés.

Hoy somos culpables hasta que se demuestre que somos inocentes. Y esto hace que las políticas de seguridad se hayan modificado muchísimo. Hoy en todos nuestros países, incluido EE.UU., nos pueden detener sin orden de aprehensión, pueden catear nuestros domicilios sin orden. Simplemente con la justificación de que podríamos ser terroristas. Esto ha provocado situaciones que llevadas al extremo son la que tenemos en México. Aquí tenemos sí un enemigo claro que se marcó cuando inició la guerra contra el narco que eran los cárteles de la droga. Pero hasta donde nosotros sabemos han sido tocados muy levemente. El negocio de la droga sigue siendo un negocio boyante en el país. Los cárteles controlan territorios, vías de comunicación, siguen teniendo altísimas ganancias y la sociedad es la que está siendo afectada. Es decir, aquellos que de algún modo eran afectados por estas actividades ilegales también están siendo afectados por aquellos que supuestamente los están combatiendo. Pero esto no es propiamente una guerra.

No hay una declaración de guerra ni una dictadura. Es un país supuestamente democrático. Pero todo el sistema político valida estas cosas, y parece como que esto es una anomalía. Cuando crece la criminalidad nos debemos preguntar cómo todas las instituciones la han estado auspiciando. Hay cosas que hacen que son terribles. Han creado una cantidad de cuerpos de seguridad en estos años que realmente da risa. Porque cuando crean uno, capacitado, de alto nivel, que se ocupe de combatir al crimen organizado, al cabo de un año lo sacan porque todos se corrompieron y crean otro. Empieza a ocurrir que el propio ejército y la policía están capacitando gente que en realidad está trabajando para el crimen organizado.

-¿Cómo reaccionan las sociedades ante este proceso?

-Yo creo que hay como dos sociedades paralelas acá. Esta sociedad sórdida del crimen, donde matar ya no es un problema, donde lo que está en cuestión no es si uno mata, sino cómo mata. Y otra sociedad que ya no sabe muy bien dónde está parada. Que es la que se quedó con la idea de que estábamos en un país con ciertas reglas democráticas, con cierta posibilidad de acudir a ciertas instancias de regulación jurídica, que tenía cierto tipo de valores para la cual matar sigue siendo inadmisible. Pero esa parte va quedando un poco colgada del aire. La descomposición social en México está siendo muy profunda. Porque lo que ocurre en la sociedad realmente existente es que lo que se está instalando es una situación de guerra que no es una guerra. Es un cambio de modalidades de vida. Tal vez a modalidades de muerte.

Audio:

<http://ombelicode尔蒙doblog.wordpress.com/2014/10/17/ayotzinapa-lo-que-marco-fue-realmente-el-traspaso-de-un-umbral/>

Miradas al Sur

<https://www.lahaine.org/mundo.php/en-mexico-hay-una-guerra>